



ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN DERECHO PROCESAL CIVIL

ARTÍCULO ORIGINAL

REIS, Elisa da Penha de Melo Romano ¹, ALVAREZ, Anselmo Prieto ²

REIS, Elisa da Penha de Melo Romano. ALVAREZ, Anselmo Prieto. **Asistencia jurídica gratuita en derecho procesal civil**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Año. 07, ed. 04, vol. 03, pág. 05-23. Abril 2022. ISSN: 2448-0959, Enlace de acceso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil

RESUMEN

Este artículo buscó promover una reflexión sistemática sobre la Asistencia Jurídica Gratuita y la gratuidad de la justicia en el Proceso Civil. En ese contexto, se adoptó la siguiente pregunta orientadora: qué dificulta, facilita o interfiere en el otorgamiento de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita y Justicia Gratuita, en sentido amplio y en sentido estricto, en la concepción procesal sistemática, de cara a de decisiones judiciales de diferimiento, denegación y revocación del otorgamiento del beneficio? Con el objetivo de abordar los conceptos, definiciones, su aspecto procesal y su aplicación en la fase de ejecución de la sentencia. Por ello, se utilizó el método inductivo como herramienta de investigación para la Doctrina y la Jurisprudencia, con el fin de identificar qué dificulta, facilita o interfiere en el

¹ Abogado - Estudiante de maestría en Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo – PUC-SP. – Especialización en Derecho Procesal Civil por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo – PUC-SP, Mediador certificado por el Tribunal de Justicia de São Paulo, Profesor y Coordinador de la Práctica Supervisada del Curso de Derecho en el Centro Universitario Salesiano de São Paulo – UNISAL, Profesora Asesora de la pasantía supervisada en la Universidad Cruzeiro do Sul – UNICSUL, Presidente de la Comisión OAB, va a la Facultad de la 125ª Subsección Santana – Colegio de Abogados de São Paulo, Defensor del 5º Tribunal de Ética de la Asociación Brasileña de Abogados – Seccional São Paulo, Graduado en Derecho por la Faculdade Metropolitana Unida – FMU/SP. ORCID: 0000-0003-1640-1645.

² Tutor. ORCID: 0000-0002-4464-0128.

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



otorgamiento de los beneficios de la Asistencia Jurídica. Así, a través de esta investigación, fue posible observar que la garantía de la gratuidad de la justicia implica únicamente gastos procesales y honorarios de abogados, siendo otorgados a la parte siempre que estos acrediten la precariedad de recursos. Por ello, el Código de Procedimiento Civil promueve la aplicación de la igualdad procesal para hacer justicia a todas aquellas personas desfavorecidas y en exclusión social que puedan necesitar apoyo jurisdiccional estatal.

Palabras clave: Asistencia Legal, Proceso civil, Acceso a la justicia, Cumplimiento de Sentencia.

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo pretende promover una reflexión sistemática sobre la Asistencia Jurídica Gratuita en el Proceso Civil, que regula el instituto de la justicia gratuita, contenido en el precepto constitucional de “asistencia jurídica plena y gratuita a quien acredite insuficiencia de recursos” (art. 5, LXXIV, de la CF). Limita la pertinencia de establecer las diferencias entre la asistencia jurídica gratuita y la gratuidad de la justicia, previstas en el CPC[13]/2015 y en la Ley de Asistencia Jurídica (Ley n. 1.060/1950, modificada por la Ley 7.510/1986), y aborda sus Se analizan los conceptos y definiciones que aporta la doctrina, los aspectos legislativos sobre la persona hiposuficiente y su aplicación en la fase de ejecución de la pena.

Busca demostrar la asistencia jurídica gratuita a los pobres como un instrumento útil y necesario para el acceso de la persona natural o jurídica, brasileña o extranjera, a la justicia, que, debido a los pocos recursos financieros y la falta de condiciones para pagar los costos y trámites de gastos, tienen este acceso difícil.

No es exagerado decir que el movimiento del aparato Judicial genera altos costos para el Estado en la prestación de servicios a sus jurisdicciones. Así, para garantizar

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



la eficacia jurisdiccional, el legislador estableció criterios para el otorgamiento de la gratuidad judicial.

Debido a este contexto, este artículo buscó responder la siguiente interrogante: qué dificulta, facilita o interfiere en el otorgamiento de los beneficios de la Asistencia Jurídica Gratuita y la Justicia Gratuita, en sentido amplio y en sentido estricto, en el sistema procesal concepción, frente a decisiones de aplazamiento, denegación y revocación del otorgamiento del beneficio? Por tanto, el objetivo fue abordar los conceptos, las definiciones, su aspecto procesal y su aplicación en la fase de ejecución de sentencia. Por ello, se analizarán los principales matices de la asistencia jurídica gratuita en el CPC/2015, y cuál es la relación entre el precepto fundamental de la garantía constitucional del acceso a la justicia y la eficacia judicial en el sistema Procesal Civil a través de la investigación inductiva de la Doctrina y Jurisprudencia.

2. ACCESO A LA JUSTICIA

Para Lara (2002), la expresión “acceso a la justicia” se basa en la articulación de conceptos elementales de carácter político, religioso, sociológico y filosófico de la humanidad, por lo que nuestra sociedad pasó por varias etapas hasta la necesidad de brindar asistencia jurídica a personas que no contaban con los medios económicos para pagar las sumas y gastos procesales en la judicatura, en la medida en que, hoy en día, podemos considerar el acceso a la justicia como un derecho fundamental, componente de la dignidad de la persona como ciudadano es esencial para hacer valer sus derechos humanos.

En palabras de Cappelletti (1988), en los últimos años se han roto las barreras de acceso a la justicia con medidas legislativas, que fueron creadas como un medio para mejorar el sistema de asistencia jurídica gratuita. De esta forma, los pobres obtienen cada vez más la asistencia jurídica gratuita y la justicia gratuita en el ámbito procesal para obtener una respuesta judicial, no sólo para casos de familia o

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



defensa penal, sino también para reclamar nuevos derechos, ya sea como querellantes o como demandados.

En ese sentido, la Constitución Federal del 5 de octubre de 1988, aseguró la justicia gratuita a los ciudadanos necesitados, como deber del Estado de brindar asistencia jurídica (Ley 1060/1950 modificada por la Ley 7510 del 4 de julio de 1986), teniendo como norma Infraconstitucional fue aceptada por el artículo 5, LXXIV, que define como precepto fundamental: “asistencia jurídica plena y gratuita a quien acredite insuficiencia de recursos” por parte del Estado (BRASIL, 1988).

Se advierte que la gratuidad de la justicia prevista en el sistema procesal revela una política pública judicial fundamental para garantizar a las personas naturales o jurídicas de derecho privado, que presenten hiposuficiencia y que acrediten esta calidad en la relación jurídico procesal, el acceso a la justicia, como corolario del estado democrático de derecho dentro de una sociedad más justa e igualitaria.

3. ASISTENCIA JUDICIAL Y JUSTICIA GRATUITA

De acuerdo con el pensamiento del Maestro José Cretella Junior, Álvarez (2022) describe la asistencia jurídica gratuita y la justicia gratuita, en su conjunto de carácter administrativo. A partir de esta premisa, el autor elabora también el concepto de instituto, en el que:

Denomina-se assistência judiciária o auxílio que o Estado oferece – agora, obrigatoriamente – ao que se encontra em situação de miserabilidade, dispensando-o das despesas, e providenciando-lhe defensor, em juízo. A lei de organização judiciária determina qual o juiz competente para a assistência judiciária; para deferir ou indeferir o benefício da justiça gratuita, competente é o próprio juiz da causa. A assistência judiciária gratuita abrange todos os atos que concorram, de qualquer modo, para o conhecimento da justiça – certidões do tabelião, por exemplo - ao passo que o benefício da justiça gratuita é circunscrito aos processos, incluída a preparação de provas. O requerente antes de entrar com a ação, em juízo, deverá solicitar a assistência judiciária (ÁLVAREZ, 2022)

RC: 115207

Disponível: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



Por lo tanto, en el ordenamiento jurídico procesal (artículo 98, CPC/2015), define como beneficiaria de la gratuidad de la justicia a la persona natural o jurídica, brasileña o extranjera, con recursos insuficientes para pagar las costas, gastos procesales y honorarios de abogados (BRASIL, 2015).

Para Assis (2015), el orden público establece mecanismos de apoyo a los menos favorecidos, a fin de no hacer inútil la garantía judicial para la mayoría de la población, o por lo menos inaccesible para quienes carecen de riquezas o recursos. Y todavía creo que:

Os esforços para colocar os vulneráveis em situação material de igualdade, no desenvolvimento do processo, não prescindem do prévio fornecimento dos meios mínimos para postular na justiça pública. Trata-se de elemento imprescindível para promover o equilíbrio concreto do processo, sem embargo da ulterior necessidade de recursos e armas técnicas. Neste sentido, a gratuidade revela-se essencial à garantia do acesso à justiça. (ASSIS, 2015, p. 334)

Santos (1991, p. 312) afirma en sus lecciones que la asistencia jurídica gratuita “consiste en el instituto constitucional que asegura a los necesitados y considerados económicamente más débiles, obtener servicios judiciales sin carga pecuniaria alguna”.

En este contexto, se advierte que las diferencias entre asistencia jurídica gratuita y justicia gratuita muestran que ambas proposiciones están presentes en el ordenamiento jurídico brasileño. Así, Bueno (2017, p. 458) conceptualiza:

A expressão assistência jurídica, contida no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal é subdividida na assistência judiciária, que consiste no dever do Estado de fornecer orientação jurídica a quem não tiver condições de buscá-la mediante retribuição financeira própria, na gratuidade de justiça, que consiste no dever do Estado dispensar quem não tem condições de antecipar as despesas do processo de fazê-lo.

Junto a las definiciones y conceptos propuestos por los estudiosos visitados, tenemos que la asistencia jurídica gratuita es más amplia y corresponde a un

RC: 115207

Disponibile: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



precepto fundamental, en el cual el Estado debe facilitar a todas las personas, naturales o jurídicas, que acrediten insuficiencia de recursos, la obtención del derecho a un servicio judicial amplio e integral, que debe ser prestado por órganos ajenos al Poder Judicial, como el Ministerio Público (defensor de la sociedad en su conjunto, en Derechos Difusos y Colectivos); la Defensoría Pública y la Procuraduría General de la República.

De la gratuidad de la justicia, prevista en la Ley N° 1 3.105, de 16 de marzo de 2015, en su artículo 98, §§ 1 y 3, el beneficiario estará exento del pago de honorarios, costas y demás gastos procesales y de la exigibilidad de gastos procesales por un período de 5 años, si todavía en una situación de insuficiencia de recursos, responsable de justificar la concesión de justicia gratuita (BRASIL, 2015).

El Estado, a través de los órganos mencionados anteriormente, que están destinados a ejercer las funciones esenciales de la justicia en total resonancia con el régimen democrático de derecho, posibilita la asistencia jurídica gratuita, que según Assis (2015, p. 1241):

E, por meio último, ao lado da advocacia privada, confiou-se à Defensoria Pública o patrocínio dos interesses individuais e coletivos dos necessitados. Essa atividade estatal assenta no princípio da igualdade, propiciando a criação de ordem jurídica justa.

Por lo tanto, el órgano estatal de la Defensoría Pública, como institución esencial para la función jurisdiccional del Estado y de quienes de él emanan (art. 134) (BRASIL, 1988), tiene a su cargo la orientación y defensa jurídica, en todos los casos. niveles, de los necesitados. “Corresponde, pues, a la Defensoría del Pueblo brindar asistencia jurídica plena y gratuita a quienes acrediten insuficiencia de recursos” (NASCIMENTO, 2002, p. 179).

Se advierte que la concesión de la asistencia jurídica gratuita, prevista en la Constitución en aplicación simultánea de la legislación infraconstitucional[3], también

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



favorece la libre elección de parte[4], y la preferencia por un abogado particular no impide la concesión del beneficio.

Sea como fuere, no se excluye la asistencia jurídica gratuita cuando no es financiada por el Estado, también puede ser brindada por entidades y organizaciones privadas, tales como Sindicatos, representando a favor de sus asociados o miembros de determinada categoría (Ley N° 1970), o incluso por núcleos de prácticas jurídicas de asistencia jurídica gratuita, subordinadas a las facultades de derecho privado y público (BRASIL, 1970).

Mientras que la asistencia jurídica gratuita de representación técnica es más amplia y amplia (artículo 5, LXXIV) (BRASIL, 1988), la gratuidad de la justicia se refiere a la renuncia del pago de los gastos procesales al servicio judicial (art. 98, §1 y sus artículos) (BRASIL, 2015), aunque sea proporcionado por un abogado libremente constituido por la parte.

El ámbito de la justicia gratuita, a su vez, pretende disciplinar los requisitos para el otorgamiento del beneficio de la justicia gratuita (BUENO, 2017, p. 458). Targino (apud ALVIM, 2017, p. 166) conceptualiza la gratuidad de la justicia como una prerrogativa destinada a posibilitar el acceso a la protección jurisdiccional del Estado a quienes tienen dificultades para sufragar las costas del proceso, constituyendo un derecho público subjetivo reconocido tanto a la persona física como a la persona jurídica de derecho privado, independientemente de que tenga o no fines de lucro, consistente en la exención de la obligación de adelantar los gastos procesales (TARGINO apud ALVIM, 2017, p. 166).

El Legislador, entonces, reguló la Gratuidad de la Justicia en la línea de los artículos 98 a 105 CPC/2015 (BRASIL, 2015), teniendo acceso a la justicia bajo la garantía constitucional fundamental (artículo 5 LXXIV) (BRASIL, 2015), por lo tanto, perfectamente inserta en el ordenamiento jurídico procesal constitucional.

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



Los requisitos de asistencia jurídica gratuita y justicia gratuita, por su esencialidad a la hiposuficiencia, abarcan todos los actos necesarios para la solución de lo litigio, como, por ejemplo, los gastos con la realización de un examen de código genético (ADN) y la usufructo en el pago de honorarios a notarios o registradores, asegurando así el acceso a la justicia de todos los ciudadanos ante el Poder Judicial.

4. EL MOMENTO DE LA POSTULACIÓN DEL BENEFICIO DE LA JUSTICIA GRATUITA

Hechas las premisas anteriores, pasamos al momento de la postulación de la concesión en beneficio de la gratuidad de la justicia. Tal como lo prevé el sistema procesal civil, no existe un momento procesal específico para este efecto, y por tanto no caracteriza el instituto de la preclusión. Sin embargo, la jurisprudencia nacional ha entendido que los efectos jurídicos de la justicia gratuita operan desde el momento de su otorgamiento[5].

Cabe agregar que el CPC/2015 derogó expresamente los artículos 4 y 6 de la Ley 1060/50, que regulaban el momento de aplicación del beneficio (artículo 1072, III CPC/2015), siendo la solicitud de justicia gratuita realizada en el primera manifestación del partido (BRASIL, 2015)[6].

Targino (apud ALVIM, 2017, p. 169) enseña que:

A concessão da gravidade da manifestação da parte que poderá requerê-la na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Não se exige que seja formulado no primeiro instante em que se vem ao processo, mas sua eficiência estará limitada aos atos posteriores ao seu deferimento.

En 2015 hubo un gran avance en el proceso civil, pues se dispuso que la solicitud de justicia gratuita se realizaría en el propio expediente (art. 99, §1) (BRASIL, 2015), respetando el principio de celeridad procesal. Así, en caso de hecho sobreviniente

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



de la necesidad de justicia gratuita, la solicitud de parte se hará por simple petición, en cualquier momento procesal, sin suspensión del proceso para su aprobación.

Por otra parte, el Poder Judicial da oportunidad a la parte de probar los presupuestos legales para el otorgamiento de justicia gratuita, siempre que se configure como hiposuficiente, al no tener las condiciones económicas para hacer frente a los gastos procesales sin perjuicio de su sustento (ALVIM, 2017, pág. 169).

El CPC/2015 no impide la consideración de la demanda en beneficio de la justicia gratuita a la parte que la necesite, incluso en un tribunal superior, y podrá ser solicitada por las partes a los jueces competentes, ante el órgano juzgador, como tan pronto como los requisitos para sustentar la condición de beneficiario, con el Estado brindando plena asistencia jurídica o justicia gratuita a los económicamente débiles (BRASIL, 2015).

5. OTORGAMIENTO, DENEGACIÓN Y REVOCACIÓN DEL BENEFICIO

La evolución de la CPC/2015 (BRASIL, 2015) en la gratuidad de la justicia siguió el precepto constitucional de asistencia jurídica gratuita (art. 5º LXXIV) (BRASIL, 1988), garantizando la aplicación en cualquier etapa procesal, no estando sujeta a la denegación del beneficio (Artículo 99, §2) (BRASIL, 2015) sin que el Juez del Estado analice la prueba de los supuestos para la concesión del beneficio.

Aunque el CPC/2015 (BRASIL, 2015), ha derogado algunas disposiciones de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, tales como: artículos 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 y 17 de la Ley 1.060/50, no hubo revocación expresa del artículo 5[7], hubo antinomia con el artículo 99, §2[8] de la ley procesal. Es evidente que el artículo 5 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita está en desajuste con el texto constitucional (artículo 5, inciso LXXIV) (BRASIL, 1988) y con el principio de la dignidad humana, por lo que corresponde al juez verificar, en su caso, los presupuestos para la concesión del

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



beneficio de justicia gratuita y la aplicación de la regla procesal en la decisión de concesión, rechazo o revocación del beneficio de justicia gratuita.

Concurridos los presupuestos para conceder la gratuidad de la justicia, con base en la prueba que demuestre las dificultades económicas de la parte, ésta quedará exenta del anticipo de los gastos procesales. Si el juez o tribunal concluye que no se acreditan los presupuestos legales de hiposuficiencia, se rechazará la concesión del beneficio. Esto debido a que la denegación del beneficio de la Justicia Procesal Gratuita debe basarse en elementos concretos y en la situación real del solicitante[9].

Un punto a destacar en la falta de recursos económicos de las partes es la relativa presunción para el otorgamiento de la benevolencia a la persona natural (artículo 99, §3) (BRASIL, 2015),[10] sin extensión a las empresas privadas (legal entidades).

En cuanto a la presunción, el adocrinador Bueno (2017, p. 459), afirma que:

A insuficiência de recursos é presumida quando alegada pela pessoa natural (art. 99, §3º), de modo que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não se condiciona à indispensável prova do estado de necessidade financeira do requerente, mas, em princípio, tão somente à mera afirmação dessa condição. De outro lado, a insuficiência de recursos deve ser provada quando alegada por pessoa jurídica, conforme orientação do Enunciado 481 da Súmula da jurisprudência do STJ, que não foi desconstituída pelo CPC/2015.

Otro punto, la contratación de un abogado particular por las partes (demandante o demandado) fue escenario de muchas discusiones doctrinales y jurisprudenciales, y la regla procesal vino a pacificar el entendimiento, específicamente en el art. 99, §4 (BRASIL, 2015).

El acto judicial al diferir, negar o revocar el otorgamiento de justicia gratuita se concentra en la sentencia interlocutoria, y la parte que se siente perjudicada tiene recurso de casación interlocutoria, por ser el recurso propio de la especie; a menos

RC: 115207

Disponibile: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



que el asunto sea decidido en la sentencia, cuando será posible la apelación (art. 101) (BRASIL, 2015)[11].

La excepción preliminar a la asistencia jurídica gratuita, en el nuevo sistema procesal, se formula en la contestación, en la contestación y en las contraargumentos de apelación o, tratándose de solicitud de tercero o solicitud superviniente, mediante simple petición, en el proceso mismo (art. 100) (BRASIL, 2015). A su vez, la revocación del beneficio de la gratuidad de la justicia consiste en la pérdida de la calidad de necesidad de la parte, por ser transitoria, esto es, ser necesaria en un momento y en otro no, y el cambio en la situación económica puede ocurrir la situación del beneficiario.

A la luz de la jurisprudencia, una vez revocado el beneficio, la parte correrá con los gastos procesales que no haya adelantado, y en caso de mala fe, la parte que se haya beneficiado pagará diez veces el importe de las costas en concepto de multa, invertida a favor del Tesoro Público o de la Unión (ALVIM *et al.*, 2016)[12].

6. BENEFICIARIOS

El acceso a la justicia es una garantía constitucional que debe ser facilitada a todas las personas físicas, naturales o jurídicas de derecho privado, independientemente de que tengan o no fines lucrativos, consagrada en el artículo 5 *caput*, LXXIV, XXXV de la Constitución Federal de 1988 (BRASIL, 1988), siendo esencial al Estado Democrático de Derecho, y previsto en la ley infraconstitucional contenida en el art. 98 *caput* del Código de Procedimiento Civil (BRASIL, 2015), sin distinción alguna para la concesión de justicia gratuita, sólo la demostración mediante prueba de la falta de recursos económicos para asegurar a la parte el derecho de acción, pudiendo gozar del beneficio de la asistencia jurídica gratuita, ampliada a la garantía de un defensor público y la exención en la anticipación de las costas del proceso, para superar los obstáculos económicos de acceso al derecho a la tutela jurisdiccional.

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



El derecho a la gratuidad de la justicia ha evolucionado otorgando el beneficio a las personas jurídicas de derecho privado. El STJ (Tribunal Superior de Justicia) venía reconociendo este derecho de las personas jurídicas al libre acceso mucho antes de la llegada del CPC/2015 (BRASIL, 2015), pero el Tribunal Especial consideró necesario, para el acceso, establecer una distinción entre personas jurídicas con fines de lucro y sin fines de lucro, para que pudiera determinar la prueba de precariedad de la situación financiera de la empresa. Así, vino a editar el precedente n°. 481, que dispone que la gratuidad de la Justicia se dirige a "la persona jurídica lucrativa o no lucrativa que demuestre su incapacidad para hacer frente a las cargas procesales". Así, la misma comprensión también se aplicó a la persona natural (BRASIL, 2011). El STF (Supremo Tribunal Federal) no hizo esta distinción para las empresas (personas jurídicas de derecho privado), sean o no lucrativas.

En el entendimiento de Donizetti (2017, p. 92-93), tenemos que:

O CPC/2015 não destoa do entendimento jurisprudencial, ao passo que presume como verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Em síntese, tratando-se de pedido requerido por pessoa física, descabe a exigência de comprovação da situação de insuficiência de recursos, salvo quando o Juiz evidenciar, por meio da análise dos autos, elementos que demonstrem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça. Nessa hipótese o juiz deverá oportunizar a manifestação da parte, a quem caberá comprovar a insuficiência. Tratando-se de pessoa jurídica, a insuficiência de recursos não se presume, de modo que esta deverá fazer prova da necessidade, tal como assentado na jurisprudência (Súmula 481 do STJ).

el arte. 98 del CPC/2015 resolvió la controversia sobre la distinción que existía entre las personas jurídicas de derecho privado, con fines lucrativos o no, y concibió el requisito genérico de prueba de dificultad financiera, ya que muchas empresas se encuentran en una situación precaria, principalmente a las empresas individuales y microempresas, que no tienen las condiciones financieras para pagar los salarios de sus empleados (BRASIL, 2015). Por lo tanto, el instituto procesal incluye a las empresas para obtener la gratuidad de la justicia, es decir, el poder judicial les abre la oportunidad de ser consideradas beneficiarias y, a partir de la constatación de que

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



se encuentran en un real empobrecimiento empresarial, se les garantizará el acceso a la justicia para personas jurídicas.

Se requiere más rigor para otorgar el beneficio a las grandes personas jurídicas, cuando se recuerda que uno de los principios básicos de la definición es precisamente la separación del patrimonio de la sociedad y de sus socios, y que les permite responder por actos de la persona en supuestos legales expresos, especialmente cuando se compruebe que la entidad comercial fue utilizada o constituida para eludir la ley o lesionar derechos considerados indisponibles, como en los casos de desconocimiento de la personalidad jurídica de la empresa.

El alcance de los beneficios de justicia plena y gratuita es personal, y se otorgará a la parte, caso por caso, no extendiéndose al coadyuvante o causahabiente de los beneficiarios, quienes podrán obtener la concesión previa solicitud. (art. 99, §6) (BRASIL, 2015), demostrando que reúnen los requisitos legales de admisibilidad para aprobación expresa. Así, “El derecho al beneficio de la gratuidad es personalísimo, concierne únicamente a los titulares, de los cuales no se transmite por sesión o herencia” (SANTOS, 1991, p. 313), lo que significa que, si hay acumulación o sucesión, cada uno debe solicitar el beneficio en su propio nombre.

Lucon (2022, p. 140) afirma que el derecho del beneficiario de la justicia gratuita no se extiende a su abogado particular cuando en un eventual recurso interpuesto exclusivamente sobre el valor de la pérdida fijada a su favor, pues éste estará sujeto a la pago de la preparación, salvo que también tenga derecho al beneficio de la justicia gratuita.

Y finalmente, el CPC/2015 no descarta la posibilidad de otorgar justicia gratuita a los extranjeros que aquí residen o que, tal vez, estén aquí, y necesitan el beneficio de la justicia gratuita para acudir a los tribunales por permisiva legal (art. 5, CF/ 88 y 98 CPC/2015), independientemente de que tengan o no domicilio en el país, una vez

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



que se compruebe que no tienen medios económicos para pagar el proceso (BRASIL, 2015).

7. GRATUIDAD DE JUSTICIA EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

Iniciada la fase de cumplimiento de la sentencia, la parte, una vez beneficiaria de la gratuidad de la justicia y habiendo ganado en la demanda, queda exenta del pago de los gastos procesales y honorarios de abogado de la pérdida del pleito, pero esto no deja de ser una obligación (Art. 82, § 2, artículo 98, § 2, § 3 y 4) (BRASIL, 2015), siendo ejecutable por 5 (cinco) años posteriores a la decisión final.

Cabe señalar que, en cumplimiento de la sentencia, la interpretación, específicamente del § 4, junto con el inciso VIII, del artículo 98 CPC/2015 (BRASIL, 2015), comprende los depósitos previstos por la ley para la interposición de un recurso , ya que la interposición de acciones y la práctica de otros actos procesales, inherentes al ejercicio de la defensa plena y del proceso contradictorio, no incluye multas, v.g.[14], litigios de mala fe (art. 81) (BRASIL, 2015), lo que implica que, al final, la parte beneficiaria pagará la multa.

En este sentido, Bueno (2017, p. 463) aclara que:

Assim, o beneficiário da gratuidade de justiça pode, ao final, em execução forçada, ser compelido a pagar a multa fixada por ato de má-fé, quer quando devida ao Estado, quer quando devida à parte contrária, independentemente da revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Como puede verse, además, aun siendo el vencedor de la demanda, conforme descrito en el artículo 515, (BRASIL, 2015), titular de un título de ejecución judicial y habiendo reconocido su derecho a exigir la obligación de pagar cierta cantidad, para hacer , no hacer o entregar algo; sigue siendo responsable de la anticipación de los gastos procesales.

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



En este contexto, Assis (2015, p. 343) señala que:

Parece óbvio, que, nesses processos, a colaboração do executado sempre representará fato accidental, motivo por que o custo financeiro pela instauração e pelo desenvolvido da atividade processual recairá unicamente sobre o exequente, em cujo proveito realiza-se a execução. O objeto do dever de antecipar equivale ao objeto da responsabilidade pelo reembolso. Porém, impõe-se considerar as partes legalmente isentas do dever de antecipação.

Es deber del juez prever la responsabilidad del reintegro, que representa una reparación por la pérdida. El pronunciamiento del juez debe ser explícito, sin lo cual no existe obligación por parte del perdedor de reembolsar al ganador los gastos procesales. Para que el deudor reembolse al vencedor de la demanda, la obligación nace por disposición judicial, la sentencia. En la ejecución de la sentencia, la imputación al vencido es inequívoca. Tendrá que responder de todos los gastos del proceso, quedando, sin embargo, exento del pago mientras subsista su miserable situación.

Si se concede el beneficio de la gratuidad de la justicia, permanece efectivo para todas las fases del proceso judicial, incluida la fase de ejecución, y el beneficio sólo puede ser revocado mediante decisión judicial motivada (98, § 3) (BRASIL, 2015).

Bueno (2017, p. 463), al abordar el tema, diserta:

O deferimento da gratuidade da justiça é *sui generis* decisão provisória sujeita a revogação sempre que houver alteração das condições da situação financeira de quem postular e obtiver seu deferimento. Significa, portanto, que o benefício é, em regra, *temporário e condicional*, já que pode ser revogado a qualquer tempo e está subordinado à manutenção da situação de hipossuficiência financeira.

Cabe señalar que la ejecución forzosa busca la constricción de bienes para satisfacer el crédito. Shimura (1997, p. 78) aclara la responsabilidad patrimonial:

Como o devedor não pode ser física e corporalmente coagido a cumprir a obrigação, é o seu patrimônio que responde, em última

RC: 115207

Disponível: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



análise, pela satisfação do débito. Desdobra-se em dois elementos distintos, o caráter pessoal (dívida) e outro de caráter patrimonial, que é de responsabilidade, o que se traduz na sujeição do patrimônio a sofrer a sanção civil. Normalmente, esses dois elementos reúnem-se em uma só pessoa, o devedor, sendo certo que não pode existir dívida sem responsabilidade. Mas, o reverso é possível, ou seja, o patrimônio de uma pessoa pode responder pela obrigação sem ser devedor, nesse particular, o que há é sujeição, e não propriamente obrigação.

Se advierte, de las enseñanzas de Bueno (2017), que no debe confundirse la insuficiencia de recursos con la circunstancia de que la parte tenga o no tenga bienes. La parte, aunque no tenga ingresos suficientes para pagar las costas y gastos procesales sin perjuicio de su propia subsistencia, puede tener bienes. De esta forma, aún puede contar con el derecho a la exención de gastos y costas judiciales, cuando se compruebe debidamente la insuficiencia de ingresos mensuales, sin embargo, al final del proceso, deberá responder por las costas judiciales fijadas por la pérdida del juicio (BUENO , 2017, pág. 460)

En este caso, si hay equidad, a la que se concedió el beneficio de la justicia gratuita, la exención podrá ser parcial (art. 98, § 5) (BRASIL, 2015) para gastos procesales.

Queda la responsabilidad patrimonial de la parte (art. 798) (BRASIL, 2015), y, mediante ejecución forzosa, el sucumbente responde con sus bienes por el incumplimiento de la deuda de honorarios de abogado, para que los bienes puedan ser pignorados y enajenados de enjuiciamiento para enfrentar la expropiación de los fondos (BUENO, 2017, p. 460).

Siguiendo la línea de los doctrinarios refrendados, el deudor beneficiario de la gratuidad de la justicia, en la ejecución de la sentencia, responderá con su patrimonio por las sumas de la sucumbencia (artículo 82, §2º y artículo 98, §3º) (BRASIL , 2015) cuando sea condenado al pago de las costas y honorarios de abogados, quedando condicionado el pago a la revocación del beneficio y por el tiempo previsto en la norma procesal.

RC: 115207

Disponível: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



8. CONCLUSIÓN

A pesar del acceso a la justicia (artículo 5, (BRASIL, 1988)) para quienes la necesitan, en la realidad social existe el llamado “mundo de la ficción jurídica”, o plano ontológico. Cabe señalar que la aplicación de las normas vigentes (Ley 1060/50 y Ley 13.105/2015) en el sistema procesal es necesaria para asegurar a las partes, de manera equitativa, la real eficacia judicial en la aplicación de los principios fundamentales, la dignidad de la persona los derechos humanos, la igualdad y el debido proceso de ley, consagrados en la Constitución Federal/1988, permitiendo el acceso al Poder Judicial a todas las personas naturales o jurídicas de derecho privado, en caso de insuficiencia demostrada y falta de asistencia jurídica gratuita y justicia para el acceso a la justicia plena y gratuita en la resolución de sus conflictos.

Volviendo al problema de investigación: qué dificulta, facilita o interfiere en el otorgamiento de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita y Justicia Gratuita, en sentido amplio y en sentido estricto, en la concepción procesal sistemática, frente a las decisiones judiciales de aprobación, denegación y revocación de la concesión del beneficio? Se pudo concluir que el Código Procesal Civil aprueba la regulación del caso concreto en la aplicación de la igualdad procesal para hacer justicia a todos aquellos que se encuentran en situación de indigencia y exclusión social y que necesitarán del apoyo judicial estatal, es decir, para hacer cumplir sus derechos amenazados o lesionados, repercutiendo en las garantías de derechos de dimensión social y democrática.

La construcción dogmática contemporánea ha sido en el sentido de que la imagen de la justicia refleja las aspiraciones de una sociedad más igualitaria, libre y democrática, utilizando los instrumentos constitucionales del sistema procesal brasileño.

De ahí la gratuidad de la justicia instituida en la doctrina y la legislación como un derecho universal, que se funda no sólo en razones jurídicas, sino, sobre todo,

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



sociales y políticas. Así, es fundamental que el otorgamiento del beneficio se extienda a la persona natural y jurídica de derecho privado y, para el otorgamiento del beneficio, se guíe por supuestos específicos, pues el aparato judicial genera elevados costos que son soportados por el Estado, a fin de ser consecuente con la disposición constitucional, pero también con el aparato judicial.

La hiposuficiencia debe orientar el otorgamiento del beneficio y debe someterse a la debida evaluación del sistema procesal vigente, a fin de que los solicitantes acrediten sus situaciones personales amoldadas al texto legal. En consecuencia, una vez cumplidos los presupuestos de la norma procesal civil, es deber del Estado-Juez otorgarla, quedando prohibido cualquier análisis subjetivo que no tenga en cuenta los elementos objetivos para la concesión. Se observó, entonces, que la postulación de la gratuidad de la justicia se hace en cualquier momento procesal, siempre que exista una necesidad real del solicitante de la gratuidad de la justicia, caracterizada por la disposición legal, como un derecho personalísimo para el bien natural y persona no jurídica.

Se demostró que la garantía de justicia gratuita a las personas jurídicas de derecho privado se otorga siempre que acrediten la precariedad de recursos, aun cuando no puedan pagar a sus empleados, y se concluyó que no se confunde el patrimonio de la empresa con el de los socios.

También se afirmó que el otorgamiento de la gratuidad judicial, según el sistema CPC/2015, es sumamente excepcional y sólo implica gastos procesales y costas judiciales, sin incluir la condonación de las multas impuestas en el curso del proceso, como parte beneficiaria de la justicia libre actuó de mala fe, procurando el legislador preservar la buena fe procesal de las partes.

Finalmente, a la condena a sucumbencia en la ejecución de la ejecución de la sentencia, la parte beneficiaria tiene el deber de pagar los gastos procesales y costas judiciales, quedando esta obligación suspendida y condicionada a la

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



revocación de la gratuidad de la justicia por un período de 5 (cinco) años (artículo 98, § 2 y § 3) (BRASIL, 2015). De esta manera, el sistema procesal y la Ley de Asistencia Judicial Gratuita se relacionan de conformidad con el régimen democrático de derecho, con todo el aparato de apoyo para un amplio acceso a la justicia, el cual, si bien aún no completamente efectivo, ha sido un importante instrumento en la garantía de los derechos fundamentales de grandes sectores de la población, antes excluidos de la participación en el pacto social.

REFERENCIAS

ALVAREZ, A. P. **Uma Moderna Concepção de Assistência Jurídica Gratuita.**

Disponível

em:

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista53/moderna.htm>.

Acesso em: 14 fev. 2022.

ALVIM, A. A. et al. **Comentários ao Código de Processo Civil. Lei N. 13.105-2015.**

São Paulo: Editora Saraiva, 2016.

ASSIS, A. de. **Manual da execução.** 13ª ed. ver. amp. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.

ASSIS, A. de. **Processo Civil brasileiro.** Volume I: Parte Geral: Institutos Fundamentais: Tomo I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 22 mar. 2022.

BRASIL. Lei Nº 1.060/1950, alterada pela Lei Nº 7.510/1986, de 04 de julho de 1986, **dá nova redação a dispositivos da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, com as alterações posteriores, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.** Disponível em:

RC: 115207

Disponível: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l7510.htm. Acesso em: 22 mar. 2022.

BRASIL. **Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015. Lei da Gratuidade da Justiça.** Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895641/artigo-98-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015>. Acesso em: 22 mar. 2022.

BRASIL. Lei Nº 5.584, de 26 de junho de 1970, **dispõe sobre normas de Direito Processual do Trabalho, altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, e dá outras providências.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5584.htm. Acesso em: 22 mar. 2022.

BRASIL. Lei Nº 6.205, de 29 de abril de 1975, **estabelece a descaracterização do salário mínimo como fator de correção monetária e acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei número 6.147, de 29 de novembro de 1974.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6205.htm. Acesso em: 22 mar. 2022.

BRASIL. Lei Nº 6.465, de 14 de novembro de 1977, **dá nova redação ao Artigo 14 da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão da assistência judiciária aos necessitados.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6465.htm. Acesso em: 22 mar. 2022.

BRASIL. **Súmula 481.** (Corte Especial). Recurso Especial Nº 1.185.828-RS (2011/0025779-8). Relator: Min. Cesar Asfor Rocha. Brasília, DF, 09 de junho de 2011. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitutional/index.php/sumstj/article/download/5175/5300>. Acesso em: 22 mar. 2022.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo (32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo). **Agravo de Instrumento Nº 2089155-**

RC: 115207

Disponível: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



63.2021.8.26.0000. Relator: Min. Luiz Fernando Nishi. São Paulo, SP, 25 de maio de 2021. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1216203615/agravo-de-instrumento-ai-20710320220218260000-sp-2071032-0220218260000/inteiro-teor-1216203713>. Acesso em: 22 mar. 2022.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo (34ª Câmara de Direito Privado Tribunal de Justiça de São Paulo). **Agravo de Instrumento Nº 2210624-37.2016.8.26.0000.** Relator: Min. Antonio Tadeu Ottoni. São Paulo, SP, 15 de fevereiro de 2017. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/900554961/agravo-de-instrumento-ai-22106243720168260000-sp-2210624-3720168260000/inteiro-teor-900554990>. Acesso em: 22 mar. 2022.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo (4ª Vara Cível). **Agravo de Instrumento Nº 2052450-90.2017.8.26.0000.** Relator: Vianna Cotrim. São Paulo, SP, 26 de outubro de 2021. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1320578883/agravo-de-instrumento-ai-21148491920218260000-sp-2114849-1920218260000/inteiro-teor-1320578925>. Acesso em: 22 mar. 2022.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (2ª Turma Cível). **Agravo de Instrumento 0721604-72.2021.8.07.0000.** Relator: Álvaro Ciarlini. Brasília, DF, 28 de julho de 2021. Disponível em: <https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1308105771/7216047220218070000-df-0721604-7220218070000/inteiro-teor-1308105780>. Acesso em: 22 mar. 2022.

BRUSCHI, G. G. **Desconsideração da Personalidade de Jurídica:** aspectos processuais. 2ª ed. São Paulo, Saraiva, 2009.

BUENO, C. S. **Comentários ao Código de Processo Civil.** Volume 1 (arts. 1º a 317). São Paulo, Saraiva, 2017.

RC: 115207

Disponível: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



CAPPELLETTI, M. **Acesso à justiça**. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988

DONIZETTI, E. **Novo Código de Processo Civil**. 2ª ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017.

LARA, R. **Acesso à justiça – princípio constitucional e a contribuição prestada pelas faculdades de Direito**. São Paulo: Método, 2002.

MARCATO, A. C. **Código de Processo Civil interpretado**. 1ª ed. São Paulo, Atlas, 2022.

NASCIMENTO, A. M. **Curso de direito processual do trabalho**. 21ª ed. São Paulo, Saraiva, 2002

VIEIRA, J. L. **Código de Processo Civil – Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015**. 5ª ed. São Paulo: Edipro, 2019.

SANTOS, M. A. **Primeiras Linhas de Direito Processual Civil**. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1991.

SARRO, L. A. G. **Código de Processo Civil. Novo código de processo civil: principais alterações no sistema processual civil**. São Paulo: Rideel, 2014.

SHIMURA, S. **Título executivo**. São Paulo: Saraiva, 2005.

APÉNDICE - NOTA AL PIE

3. La Ley 1060/50 establece normas para la concesión de asistencia jurídica a los necesitados.

Art. 14. Los profesionales liberales designados para ejercer la función de defensor o perito, en su caso, salvo justa causa prevista en la ley o, en su omisión, a criterio de

RC: 115207

Disponível: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



la autoridad judicial competente, están obligados a cumplir, bajo sanción de multa de Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) a Cr\$ 10.000,00 (diez mil cruzeiros), sujeta al reajuste establecido en la Ley N° 6.205, de 29 de abril de 1975, sin perjuicio de la sanción disciplinaria aplicable. (Redacción proporcionada por la Ley N° 6.465 de 1977)

- **1º** A falta de indicación de la asistencia o de la propia parte, el juez solicitará la del órgano de clase respectivo. (Incluido por la Ley N° 6.465 de 1977)
- **2º** La multa prevista en este artículo revertirá en beneficio del profesional que asuma la carga del caso. (Remunerado del Párrafo Único, con nueva redacción, por la Ley N° 6.465, de 1977).

4. CPC/2015: “**Art. 99.** La solicitud de gratuidad de la justicia puede formularse en la petición inicial, en la contestación, en la petición de entrada de un tercero en el proceso o en la apelación.

- **4º** La asistencia del solicitante por un abogado particular no impide el otorgamiento de justicia gratuita.

5. RESUMEN: “Gastos de condominio Cobro Cumplimiento de sentencia Asistencia jurídica Persona jurídica Precariedad económica demostrada Otorgamiento Efectos de la concesión que operan ex nunc, de la sentencia dictada, no aplicándose a actos pasados Costas finales debidas Recurso previsto en parte.” (26ª Sala de Derecho Privado de la Corte de Justicia de São Paulo, dicte la siguiente decisión: "El recurso fue parcialmente concedido. V. U.", de acuerdo con el voto del Relator, que forma parte de esta sentencia. La sentencia fue atendida por los Honorables Jueces Felipe Ferreira (Presidente) y Antonio Nascimento Recurso Interlocutorio No. 2052450-90.2017.8.26.0000 Relatora: Vianna Cotrim São Paulo, SP, 26 de octubre de 2021. Disponible en: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1320578883/agravo-de-instrumento-ai-21148491920218260000-sp-2114849-1920218260000/inteiro-teor-1320578925> Acceso: 22 de marzo de 2022.

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



6. Arte. 99 CPC/2015 “La solicitud de gratuidad de la justicia puede formularse en la petición inicial, en la contestación, en la petición de entrada de tercero en el proceso o en apelación; y en su § 1º - Si sobreviniendo a la primera manifestación de la parte en la instancia, la solicitud podrá formularse por simple petición, en el auto del propio proceso, y no suspenderá su curso.

7. “el juez, si no tuviere motivos fundados para rechazar la solicitud, deberá juzgarla de plano, motivando o no la concesión en el plazo de setenta y dos horas”

8: “El juez sólo podrá rechazar la solicitud si existen en el expediente elementos que demuestren la falta de requisitos legales para el otorgamiento de la gratuidad, debiendo, antes de rechazar la solicitud, determinar a la parte la prueba del cumplimiento de dichos supuestos.”

9. RECURSO INTERLOCUTORIO - Justicia Gratuita - Desestimación de la medida cautelar en 1er Grado - Imposibilidad - Inteligencia del art. 99, §2 del CPC - El magistrado debe cumplir fielmente el orden legal para brindar a la parte la oportunidad de probar su insuficiencia económica, antes de rechazar los beneficios de la gratuidad de la justicia - necesidad de la parte de probar el derecho - Recurso no conocido, con determinación y observación". TJSP, Instrumento -2093894-35.2019.8.26.0000.

10. “RECURSO DE INSTRUMENTO - ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA - RECHAZO - Improcedente - Si bien el artículo 99, inciso 3, del Código de Procedimiento Civil propugna la presunción de veracidad de la pretensión de hiposuficiencia suscrita por la parte, en caso de existir elementos que descarten esta presunción, el juez deberá proveer a la parte que acredite su insuficiencia económica - denegación del plan de beneficios - inadmisibilidad - Infracción a lo dispuesto en el artículo 99, §2 del Código de Procedimiento Civil - Devolución de la causa a la fuente para que el magistrado cite al recurrente a probar el cumplimiento de los requisitos para la concesión del beneficio - RECURSO PROVISTO DE

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



DETERMINACIÓN". Recurso Interlocutorio No. 2089155-63.2021.8.26.0000.
Ponente: Min. Luis Fernando Nishi. São Paulo, SP, 25 de mayo de 2021.

11. Nuevo código procesal civil: principales cambios al sistema procesal civil, coord.
Luiz Antonio Giampauolo, 2014, pág. 28

12. "SEGURIDAD SOCIAL. APELACIÓN DEL INSS. DEROGATORIA DE LA JUSTICIA LIBRE. ARTÍCULOS 98, 99 Y 100 DEL CPC. DESPIDO. - El INSS, en apelación, solicitó la revocación de la justicia gratuita - El juzgado de origen otorgó justicia gratuita al solicitante y determinó la citación - Citada, el INSS interpuso recusación, pero no impugnó la justicia gratuita en los términos recomendados por el art. 100 del CPC - La solicitud de revocación de la justicia gratuita puede hacerse en cualquier momento del curso del proceso. Sin embargo, como se desprende del artículo 98, § 3, del CPC, tal solicitud presupone la demostración de que hubo un cambio en la situación que había dado lugar a la concesión de la gratuidad - En su caso, los elementos señalados por demandada para sustentar su solicitud de revocación de justicia son las mismas que ya se encontraban en el expediente al momento de otorgar la prima y sobre las cuales no hubo impugnación oportuna por parte del municipio en la defensa - La solicitud de revocación de la gratuidad la justicia fue rechazada - Apelación conocida y faltante".

"REVOCACIÓN DE LA JUSTICIA LIBRE. Ausencia de prueba que demuestre la inexistencia de los requisitos que dieron lugar al otorgamiento de la gratuidad procesal. Declaraciones firmadas que tienen presunción iuris tantum. La mala fe por parte del acreedor no será sancionada con la revocación de la asistencia jurídica gratuita. Se cambió la oración en esta parte. recurso proporcionado".

"INSTRUMENTO DE APELACIÓN. SOLICITUD DE REVOCACIÓN DE JUSTICIA GRATUITA. La percepción del autor de ingresos expresivos reflejados en los estados financieros constituye una circunstancia que autoriza la revocación de la JG previamente otorgada. Precedentes de esta Clase".

RC: 115207

Disponible: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,



13. Código de Procedimiento Civil.

14. Tarifas de sucumbencia.

Enviado: Diciembre de 2021.

Aprobado: Abril de 2022.

RC: 115207

Disponibile: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ley/derecho-procesal-civil>,